

Los nuevos nómadas

Armando Bartra
Instituto de Desarrollo Rural Circo Maya

Las grandes migraciones son historia antigua, pero si en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX marchaban principalmente de las metrópolis europeas a las colonias de ultramar, hoy se mueven a contraflujo: de sur a norte, de la periferia al centro, de los bordes rurales y subdesarrollados al corazón urbano del sistema. El 85% de los nuevos peregrinos escapa de naciones inhóspitas con ingresos *per capita* menores de cinco mil dólares al año rumbo a países prósperos con percepciones anuales promedio de veinticinco mil dólares o más.



La humanidad, que en el pasado colonial se desparramó por el planeta ocupando paulatinamente ámbitos de riquezas prometidas y tenue demografía, está regresando atropelladamente. En una suerte de colonización al revés, los pobres de África y el Oriente Medio se vuelcan sobre Europa Occidental: los iraquíes, afganos y curdos a través de Turquía; los africanos del norte y el occidente cruzando el estrecho de Gibraltar. Mientras en América, los del sur concepto que pese a la geografía nos incluye emprendemos la larga marcha a la tierra prometida del *gabacho*: los mexicanos nos agolpamos a orillas del río Bravo o de la cerca metálica fronteriza, y lo mismo hacen, aunque más viajados, los salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, panameños...

Por un flujo poblacional semejante, las grandes ciudades del subdesarrollo devienen andrajosas megaurbes atestadas de emigrantes. En América son Sao Paulo y la ciudad de México, con cerca de veinte millones de habitantes cada una. De Egipto hacia el oriente los grandes hacinamientos son Manila, con alrededor de veinte millones de pobladores; El Gran Cairo, con quince; Yakarta,

con catorce; y por el estilo Bombay, Shangai y Estambul, engrosados día tras día por ríos de damnificados sociales.

Es la globalización de a pie, la mundialización plebeya. Al tiempo que la industria trasnacional de origen norteamericano segmenta procesos productivos desperdigándose por los cinco continentes y el capital financiero que fuera metropolitano recorre el planeta lucrando instantáneamente a través de *la red*, millones de trabajadores harapientos se desplazan en sentido contrario por las polvosas veredas del éxodo.

Y es un peregrinar doloroso, lacerante. Porque la trata de indocumentados es compulsión multitudinaria y también negocio global. Siempre habrá cóleras furibundas, celos airados y envidias compulsivas, pero el gran delito, aquel que hace de la inseguridad societaria una enfermedad crónica, progresiva y mortal, es hijo del absolutismo mercantil. El crimen que cuenta, el crimen organizado, es una variante de la libre empresa; una inversión de capital en actividades riesgosas, que por serlo reportan utilidades extraordinarias, una suerte de renta del clandestinaje. Así, el comercio de seres humanos, como el mercadeo ilegal de armas y el narcotráfico, son responsables de la gangrena social planetaria, al tiempo que flamantes negocios globales de máxima rentabilidad. *Pecar por la paga*, meterle un tiro al vecino, drogarse hasta el desfiguro, pueden ser conductas indeseables, pero como presuntos delitos resultan manejables: crímenes entrañables, asuntos de moral con dimensiones humanas. En cambio el tráfico masivo de personas, armas y drogas desquicia la convivencia universal porque sus metástasis se replican a través del mercado. Lo que está detrás del gran delito igual que detrás del gran dinero es la perversa sabiduría de la libre competencia para asignar recursos a los negocios con mayor tasa de retorno, sin hacer remilgos por su impertinencia social ni detenerse en melindres éticos.

El intercambio es ciertamente civilizatorio, pero el monstruo frío del mercado que lucra con el éxodo y otras compulsiones, es el mal sobre la tierra. Baste recordar que el trasiego de personas regenteado por mortíferos mercaderes de ilusiones mueve siete mil millones de dólares anuales, con ganancias sólo

superadas por el tráfico de armas y el de sicotrópicos. En tiempos de capitalismo salvaje y crimen organizado planetario, la cifra de la bestia ya no es 666 sino D-M-D´.

Y todo porque en el reino del gran dinero la riqueza total engendra pobreza total; omnipotentes y desvalidos navegando en la red; lujo y carencia extremos frente una misma pantalla de televisión; hambre terminal y hartazgo desmedido compartiendo el baño en la casa transparente de la globalidad. Y el centro envejece mientras que los márgenes rebosan adolescentes a la intemperie. Entonces el nuevo éxodo es un arponazo de sangre joven a las metrópolis decrépitas: una imperiosa necesidad y una indeseable dependencia.

En el cruce de milenios los surianos errantes asedian las fortalezas primermundistas y toman por asalto las ciudades. La barbarie orillera irrumpe en los *malls* de la civilización. Y esta implosión no es sólo andrajoso gentío en movimiento, es también invasión cultural y cerco político; exportación de ritmos, atuendos, sabores, utopías; sacudimiento de imaginarios colectivos. Es una “revolución centrípeta”.

Y va para largo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo creciente es el mayor drama humano del planeta, y en la depresión del arranque del siglo perdieron su trabajo unos 24 millones de personas. Pero esto no es nada: en la próxima década se sumarán al mercado laboral 500 millones de nuevos solicitantes principalmente en los países periféricos, mientras que si bien nos va se crearán unos 100 millones de empleos. Entonces, la migración no es un epifenómeno del mercado que sirve para redistribuir racionalmente la oferta de fuerza de trabajo en función de la demanda; el éxodo es un derivado de la exclusión económica, política y social, por el que la pobreza y la desesperanza se dispersan por todo el planeta.

En el continente americano las tendencias demográficas indican que en el último siglo los índices del crecimiento de la producción no coincidieron con los del incremento poblacional. Pero muestran también que el desbalance demográfico entre el norte y el sur genera flujos migratorios desordenados e

incontrolables. Éxodos que lejos de restablecer el equilibrio, dislocan al continente y pueden conducir a una verdadera crisis civilizatoria. Hace un siglo la población americana se agolpaba en Estados Unidos donde vivían cien millones, mientras que en los países latinos del continente habitaban sólo ochenta. En menos de cien años la distribución se invirtió: hoy Estados Unidos tiene 260 millones de habitantes, mientras que en América Latina se apretujan 500 millones. Y los del denso y amargo sur se mueven inconteniblemente hacia el norte en un peregrinar doloroso, incierto y lleno de acechanzas.

Transhumantes de por acá

Un fantasma recorre el campo mexicano: el fantasma de la migración. El nomadismo estacional a las pizcas es ancestral y más que centenaria la



mudanza a Estados Unidos desde Guanajuato, Jalisco, Michoacán o Zacatecas. Por un tiempo muchos peregrinos se emplearon en la industria pesada de Illinois y luego, otros, en los campos agrícolas de California, Arizona y Texas. Pero en las últimas décadas la compulsión trashumante contagió al centro, al sur y al

sureste mexicano de modo que hoy Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas aportan grandes contingentes al éxodo. Y los destinos se han diversificado: Carolina del Norte, Virginia, Florida, Washington, Nueva York, Colorado y Oklahoma entre otros estados.

Se van los pobres que ahorraron para el viaje o encontraron “pollero” que les fie, pero se van también los acomodados; agarran camino los campesinos, como sacan boleto los urbanos; se mandan mudar los indios y migran los mestizos; marchan hombro con hombro priístas, perredistas, panistas y zapatistas; desertan a la par católicos y protestantes; se despiden los niños, los jóvenes y los viejos; los hombres y las mujeres; los analfabetas y los doctorados. La patria, toda, se desangra demográficamente en el gabacho al

ritmo de medio millón de tráfugas al año, más de cuarenta mil al mes, uno por minuto.

Se desfonda el país, pero en particular las comunidades rurales mexicanas se están vaciando. Y los primeros en agarrar para el norte son los jóvenes campesinos.

En los últimos treinta años, desde que se desplomó la tasa de crecimiento económico, se han creado apenas 11 millones de empleos formales, acumulándose un déficit de alrededor de 15 millones de puestos de trabajo. En la primera década del TLCAN, de 1994 a 2004, casi trece millones de jóvenes mexicanos ingresaron al mercado de laboral, mientras que se crearon únicamente 2.7 millones de nuevas plazas, de modo que sólo en este lapso el desempleo acumulado ha sido de diez millones. Pero hay una buena noticia: cada día cerca de mil quinientos demandantes de empleo dejan de demandarlo; por desgracia esto no es debido a que se hayan creado aquí buenos puestos de trabajo sino porque los buscadores de empleo se fueron a los Estados Unidos.

Durante los ochenta todos los años se incorporaban 800 mil personas al mercado laboral, cifra que en los noventa llegó al millón y pronto será de un millón trescientos mil. Pero, qué pasa con esa multitud de jóvenes buscadores de empleo. A grandes trazos, podemos decir que 250 mil se estacionan en la desocupación: un forzado "parasitismo social" que roe el ingreso de los afortunados que sí tienen empleo; otros 250 mil se incorporan a la creciente economía informal, donde se disputan las banquetas unos 15 millones de trabajadores sin estabilidad, ni seguridad social, ni vacaciones, ni reparto de utilidades; y a la otra mitad, alrededor de medio millón, le sale lo pata de perro y busca más allá de la frontera un porvenir que su país le regatea.

Al permutar por apertura comercial el derecho y la obligación del Estado mexicano a desarrollar políticas de fomento que hagan económicamente viables las actividades productivas que son socialmente necesarias, los gobiernos neoliberales tiraron a la basura la seguridad laboral y la soberanía en

el empleo. Y un gobierno incapaz de garantizarle a los gobernados ocupación segura, ingreso digno y expectativas de progreso, es un gobierno que falta a sus deberes elementales. Porque un país sin empleos decentes y sin esperanzas, un país que expulsa masivamente a sus ciudadanos, es en una nación apocada, minusválida. Y, lo peor de todo, es una nación jenuflexa, una nación peligrosamente sometida a las veleidades de quienes reciben de mala manera a sus migrantes.

Vergüenza debía de darnos. Pero no. En el fondo a los tecnócratas la exportación de compatriotas les parece un buen negocio: si aquí están de más, pues al ser mayor la oferta laboral que la demanda de trabajadores el valor marginal de los sobrantes tiende a cero, cualquier cosa que nos paguen por quitarnos el estorbo será ganancia. Y por si fuera poco, en el último lustro se descubrió que las famosas remesas, el pago que recibimos por enviar mexicanos a los Estados Unidos, ya superan el valor de cualquier otra exportación excepto el petróleo. Negocio redondo. O, como dice Fox: “¡Puro gana, gana, gana...!”

Para qué queremos productores de maíz o de café, si los ingresos por remesas ya son cuatro veces más grandes que los ingresos por exportaciones agrícolas. Para qué queremos campesinos si el dinero que envían los transterrados ya rebasa el 50% del valor de toda la producción agropecuaria y sigue aumentando. Por qué preocuparse por la autosuficiencia y la seguridad alimentaria si los dólares de los migrantes alcanzan sobradamente para pagar las importaciones de alimentos. Para qué andan nuestros labriegos causando lástimas con sus bajos rendimientos de aquí, cuando se pueden ir a chambear con más provecho al Imperial Valley. O, para decirlo con rigor econométrico y propiedad tecnocrática: para qué andarnos con soberanías laborales, soberanías alimentarias y demás mamadas populistas, cuando es tan fácil exportar campesinos e importar alimentos.

Hace veinticinco años, en 1980, entraron a México por remesas apenas setecientos millones de dólares mientras que en el 2005 llegarán alrededor de veinte mil millones, y sólo en lo que va del sexenio de Fox los ingresos por ese

concepto prácticamente se triplicaron. Así, en las décadas de la conversión neoliberal la migración de mexicanos a los Estados Unidos aumentó quince veces y los envíos en dólares se multiplicaron por treinta. Sin duda dos saldos mayores de la globalización a la mexicana —una liberación mercantil que no rompió más cadenas que las productivas— han sido el éxodo y las remesas: magnos flujos que nos hacen un país socialmente trashumante y económicamente entonado, pues dependemos cada vez más de la voluntad y capacidad ahorradora de los transterrados.

Pese a loables esfuerzos por transformar envíos en inversión productiva, el hecho es que el grueso de los mismos se emplea en la subsistencia. “Las remesas son un complemento o sustituto del ingreso laboral y no un capital de inversión”, concluye el Fondo Monetario Internacional en el estudio *¿Son las remesas de los migrantes una fuente de capital para el desarrollo?* (Roberto González Amador, *Ínfimo impacto de remesas en crecimiento de países receptores*, en *La Jornada* 9/7/05). Y reitera: “... las remesas no pueden ser identificadas como capital para el crecimiento económico, sino como una compensación para un pobre desempeño económico”.

Entonces, aunque entre 1994 y 2003 las remesas representaron para México más de la mitad de la inversión extranjera directa acumulada, su impacto económico no va más allá de compensar el déficit de la cuenta corriente, preservar la fuerza del peso y estimular el mercado interno de bienes de consumo.

Las remesas tienen la lógica de los salarios y no son ni serán “una fuente de capital para el desarrollo”. Lo que significa que el desfondamiento poblacional de un país cuya más rentable exportación son sus propios ciudadanos, es una operación ruinoso y suicida por la que estamos dilapidando nuestro “bono demográfico” y poniendo en entredicho nuestra capacidad futura de sostener a la población.

Por cincuenta o sesenta años —de los que ya transcurrió más de la mitad— México tuvo, tiene y tendrá el privilegio de ser un país de jóvenes. A mediados

de los setenta, por cada cien mexicanos en edad activa había cien pasivos. Pero desde entonces la población rejuveneció y hoy por cada cien potencialmente activos sólo hay sesenta y dos pasivos. Proporción que mejorará aun más en los próximos años y se mantendrá por debajo de sesenta sobre cien hasta fines de la tercera década del presente siglo.

En el tránsito del segundo al tercer milenio a México le tocó ser una nación en la flor de la edad. Privilegio extraordinario, pues como pueblo joven por unas décadas tendremos la capacidad de producir mucho más valor del que consumimos. Pero las posibilidades de ahorro-inversión propias del período en que gozamos del bono demográfico no pueden desperdiciarse, pues en el mismo lapso se irá incrementando el número de adultos mayores, de modo que para la cuarta década del siglo se habrá invertido la pirámide poblacional. Si ahora México es un país de jóvenes, en veinte o veinticinco años será un país de viejos: hoy tenemos poco más de ocho millones de adultos mayores de sesenta, el 7.7% de la población; mientras que en veinticinco años serán el 17.5% y a mediados del siglo tendremos el 28%, 36 millones de viejos.

Sin pretensión metafórica podemos decir que los jóvenes son nuestra riqueza más preciada. El problema está en que en las últimas dos décadas, muchos de quienes llegan a la edad laboral no se incorporan a un trabajo realmente productivo sino que se estancan en el desempleo o se ven empujados a la ineficiente y a veces parasitaria economía subterránea, mientras que otros tantos no encuentran mejor opción que salir por piernas.

Dónde están, entonces, los jóvenes mexicanos; donde se encuentra la joya de nuestra corona demográfica: unos sembrando amapola y mariguana en las serranías o sirviendo de sicarios a los cárteles de la droga; otros más voceando cd piratas en el metro, ofertando desarmadores chinos en los semáforos o vendiendo chambritas en Correo Mayor; mientras que quienes tuvieron suerte se derrengan en las maquiladoras negreras y golondrinas. Pero un número cada día mayor de jóvenes se va para el otro lado, escapa rumbo a Estados Unidos.

La destrucción del gran reducto de subsistencia productiva que era el campo mexicano y el desmantelamiento de la pequeña y mediana empresa que generaba empleos, provocaron la estampida poblacional y generaron una espiral perversa: la fuerza de trabajo joven y cada vez mejor capacitada emigra a Estados Unidos pues allá su labor es más productiva y mejor pagada; en consecuencia el excedente económico generado por muchachos nacidos, criados y educados en México no se invierte en elevar el ahorro y la capacidad productiva de nuestro país sino en capitalizar al país vecino; con lo que la asimetría se profundiza y con ella las causales del éxodo...

La transmutación del bono demográfico en remesas destinadas al consumo es mucho más que un pésimo negocio, es un suicidio nacional. Suicidio posdatado pero no por ello menos fatal. Durante un par de décadas podremos seguir a exportando a los jóvenes que nos "sobran" y sosteniendo con sus remesas a los todavía pocos viejos que se quedan. ¿Pero qué haremos cuando la pirámide poblacional se invierta? ¿Qué vamos a hacer cuando seamos un país de viejos que dilapidó miserablemente su bono demográfico?

La soberanía energética y alimentaria son importantes, la soberanía laboral es decisiva. Está muy bien defender el petróleo, la biodiversidad, el agua potable... pero no hay nada más importante que defender a nuestros jóvenes.

Si no enmendamos ahora el camino, si no cambiamos la economía de carril cuando aun estamos a tiempo, el día en que la pirámide poblacional se invierta será tarde. Por décadas el crecimiento económico de México ha sido insatisfactorio, pero en veinte años nuestra economía y nuestra sociedad entrarán en una espiral de deterioro progresivo, exponencial, irreversible...

El derecho de no migrar

Cuando la migración es absoluta y no sólo relativa. Cuando no es movimiento progresivo sino resultado de una catástrofe social, en última instancia no es posible normalizarla y dignificarla. Se pueden atenuar los dolores, pero el remedio de fondo está en otra parte.

Con ser importantísima, la cuestión de los derechos de los migrantes no es radical. Y no lo es pues no va al fondo del problema: una desbandada poblacional que se origina en la destrucción de la economía de las sociedades periféricas. Naciones que en la nueva globalización han perdido lo que les quedaba de seguridad alimentaria y de seguridad laboral. Países incapaces de garantizar a su población lo mínimo: comida y empleo. Estados que dependen de importaciones masivas de granos básicos y en la de malas de la ayuda alimentaria. Gobiernos que a falta de otra cosa exportan a sus ciudadanos y cuyas divisas provienen principalmente de las remesas de los expatriados.

El libre mercado no procura comida y empleo. Si queremos seguridad alimentaria y seguridad laboral, necesitamos acciones de gobierno comprometidas con el bien social. Y para tener estas políticas públicas necesitamos soberanía: soberanía alimentaria y soberanía laboral. Entendemos por soberanía alimentaria la capacidad estatal de fomentar la producción sostenible de granos y otros cultivos básicos, al tiempo que se genera el ingreso necesario para que su población pueda acceder a estos bienes. Entendemos por soberanía laboral la capacidad que tiene un Estado de fomentar la creación de empleo digno y suficiente, que ofrezca estabilidad y futuro al conjunto de su población.



No estoy hablando de autarquía. Los países se asocian y pueden —por qué no— ceder soberanía en nombre de complementariedad virtuosa. Tampoco propongo autosuficiencia alimentaria y autosuficiencia laboral. Lo de las ventajas comparativas tiene algún fundamento y las importaciones alimentarias no deben asustarnos; como no debiera preocuparnos la migración vocacional y enriquecedora. Lo inadmisibles no es importar o exportar alimentos ni recibir o enviar migrantes, lo inadmisibles son naciones minusválidas, puestas de rodillas por su absoluta dependencia alimentaria y laboral.

La “solución” por el libre mercado: el TLCAN

Migrantes siempre hubo, pero ahora son legión. Y la avalancha coincide con las dos décadas del “ajuste estructural”, especialmente con el arranque del TLCAN, en 1994. Las políticas públicas que debían llevar el país al primer mundo, lo que hicieron fue llevarse a los mexicanos al *gabacho*. Los acuerdos internacionales que debían sacarnos del subdesarrollo, nos hundieron en la crisis y el éxodo. Paradójicamente el TLCAN apenas incluye consideraciones migratorias, y evidentemente no abre las fronteras a los braceros que quieran irse a trabajar, aunque sí a los empresarios que vengan a invertir.

Tras la ausencia en el tratado de referencias sustantivas a los flujos laborales, subyace la discriminación de la “mercancía humana”. Pero también la hipótesis de que la liberalización comercial dinamizaría la economía mexicana y generaría empleo, lo que reduciría la migración, mejorando, de paso, las condiciones y salarios en los mercados laborales de destino. Así, un acuerdo de apertura comercial que soslaya el mercado de trabajo y apenas se refiere a la migración, sería el remedio de fondo para el problema del éxodo.

La peregrina hipótesis tiene historia: en 1986, al aprobar el Acta de Reforma y Control de la Inmigración —conocida como Ley Simpson-Rodino— el Congreso estadounidense creó también la Comisión para el Estudio de la Migración Internacional y el Desarrollo Económico Cooperativo, que en consulta con México y otros países, debía analizar las causas y remedios del problema. La Comisión concluyó que si bien al crear capacidades, recursos y expectativas, el desarrollo propicia transitoriamente la migración, el crecimiento económico y la creación de empleos es la “solución última para la reducción de estas presiones migratorias”. Y si la llave mágica del crecimiento es la liberación del comercio y la desregulación de la economía, el TLCAN debía ser el remedio definitivo para la migración mexicana. Como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) lo será presuntamente para la que viene del resto del continente.

Pero el remedio resultó peor que la enfermedad. La liberalización del comercio, en condiciones de severa asimetría socioeconómica, ocasionó la destrucción de la economía más débil, causando mortandad en la pequeña y mediana industria, que alimenta el mercado interno y genera empleo, y arrasando con la agricultura campesina, que sustenta a casi un cuarto de la población, y en particular con los productores de granos básicos de los que depende nuestra seguridad alimentaria. Y el desmantelamiento generalizado de la base productiva generó éxodos multitudinarios, crecientes e incontrolables. La migración no resultó de los recursos, capacidades y expectativas creadas por el desarrollo, sino de la destrucción de recursos, capacidades y expectativas generada por la desregulación salvaje.

La “solución” policiaca: las “fronteras inteligentes”

El éxodo compulsivo y absoluto, producto de la desintegración de las sociedades expulsoras, no se puede controlar con el uso de la fuerza. Es posible, sí, elevar la cuota de sufrimiento y de sangre que pagan los migrantes, pero no ordenar y menos interrumpir un tránsito humano que responde a causas profundas.

Desde el Plan de Contingencia para Intensificar la Frontera Sur, formulado en 1989 como respuesta a la “Crisis de los Centroamericanos”, pasando por las leyes migratorias y contra el terrorismo de 1996, impuestas desde esa fecha a otros países a través de la Conferencia Regional de Migración que se realiza cada año, Estados Unidos ha buscado que otros contengan el flujo poblacional antes de que llegue a sus fronteras.

Con el Plan de Acción para la Cooperación sobre la Seguridad Fronteriza, en el norte, y el Plan Sur, en la frontera con Guatemala, México ha intensificado la persecución policiaca y militar de indocumentados, en una represión que en la práctica se extiende a los propios compatriotas. Pero, además de inmoral, el oficio de Cancarbero que desempeñan los gobiernos de los propios países expulsores, es tan inefectivo como los esfuerzos del Servicio de Inmigración y

Naturalización de los Estados Unidos. Penalizar la trashumancia económica significa criminalizar el mercado de trabajo al que concurren los indocumentados, constriñendo con esto sus salarios y derechos, lo que es un buen negocio para los contratadores y en última instancia para el país de destino. Pero también para otros es un gran negocio, pues de la ilegalidad de la migración nacen las redes delincuenciales que organizan el tránsito clandestino y lucran con la penuria de los peregrinos. Como las del narcotráfico, las mafias de traficantes de personas surgen de la combinación de necesidad y prohibición. Y si ésta es la relación causal, es claro que el presunto “sellamiento” de las fronteras fortalece a los “polleros” y no al contrario. Se equivoca el Plan de Contingencia de 1989 cuando afirma que “... los contrabandistas y facilitadores fraudulentos... alientan la emigración ilegal a E.U”, es exactamente a la inversa: la ilegalización de una migración socialmente motivada alienta la aparición de contrabandistas.

La “solución” neocolonial: el Plan Puebla-Panamá

Si la migración no puede pararse con “Fronteras inteligentes” —que recuerdan las trincheras de cemento y acero electrificadas, neumáticas y artilladas, que debían defender el lado francés de la frontera francoalemana y cedieron al primer *blitzkrieg*— tampoco puede atajarse con barreras socioeconómicas, como los enclaves de desarrollo exógeno que pretende crear el Plan Puebla-Panamá.

Los llamados Centros de Integración Rural que propone el PPP, y con ellos los interoceánicos corredores comerciales y de servicios, los parques industriales de maquila, los “desarrollos” turísticos caribeños de cinco estrellas, las vertiginosas plantaciones de celulósicas o huleras y las faraónicas obras de infraestructura propiciatorias de tales inversiones, son ante todo una oportunidad de hacer negocios, que el gobierno de México y sus socios de Centroamérica quisieran ofrecerle al gran capital; junto con mano de obra barata, leyes laborales y ambientales laxas, desregulación, exenciones fiscales, seguridad jurídica y otros arrumacos. Pero sus adalides prometen también un

sustantivo efecto colateral: deben ser “...espacios de atracción para contener el proceso de migración”.

De hecho estas franjas transversales de múltiple propósito ya existen, pero no son *clusters* o *land bridges*, ordenados y eficientes, donde además de fluir energéticos y mercancías, los mesoamericanos encontrarían empleo en la industria y los servicios. Son en realidad estaciones de tránsito donde las plantas de montaje negreras se combinan con los bares, los burdeles y los “picaderos”. Son infiernos sociales donde el empleo precario en la maquila se entrelaza con la prostitución, el narcotráfico y el negocio “pollero”, generando fenómenos criminales inéditos, como los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, y formas degradadas de la identidad mesoamericana, como la Mara Salvatrucha.

La “solución” autogenerada: la capitalización de las remesas

Los veinte mil millones de dólares anuales que los migrados envían de regreso, son muchos dólares, y algunos piensan que en ésta expresión del problema migratorio está también el remedio. Porque bien utilizadas, las remesas podrían generar desarrollo en las regiones de expulsión, reduciendo la urgencia peregrina de sus habitantes.

A esta lógica responden programas como Tres por uno, que buscan canalizar los envíos a inversiones de mayor impacto, sumando a ellas recursos fiscales, tanto de la federación, como del gobierno estatal y de los municipios. En el marco de estos programas se han financiado obras comunitarias de servicios y algunos proyectos productivos, como maquiladoras. Acciones plausibles, pero poco significativas, pues a ellas se canalizan ahorros y remesas colectivas, que son una pequeña parte de los envíos, mientras que la porción mayor corresponde a remesas familiares, que se destinan principalmente al consumo cotidiano o a la adquisición de algunos bienes duraderos.

Y es que las remesas son básicamente salario, y su vocación natural está en garantizar la subsistencia de la familia y de ser posible ampliar su patrimonio y elevar su calidad de vida y su estatus. En muchas ocasiones, cuando las sociedades de origen son altamente cohesivas, los envíos de los migrantes, habitualmente asociados en clubes y federaciones, se emplean en obras de beneficio comunitario. A veces —excepcionalmente— lo que ingresa son las ganancias de algunos clubes empresariales, que pretenden repetir en su país de origen el éxito en los negocios que tuvieron en E.U.

Pero, aun con disposición a invertir productivamente parte del dinero de las remesas, el problema está en encontrar proyectos viables en las regiones expulsoras. Que lo son, no tanto por falta de inversiones, como porque las condiciones de la economía no generan nuevas oportunidades productivas y desalientan las que ya existían. No se trata de emprender proyectos que dependan permanente de los envíos, sino que se sostengan solos; y esto es difícil en un país carente de verdaderas políticas de fomento productivo y con una altísima tasa de mortandad de los negocios pequeños y medianos.

Así las cosas, es dudoso que gracias a la inversión productiva de las remesas se pueda inducir el desarrollo económico cuya ausencia provocó la migración. Porque lo que impide transformar el pequeño ahorro en capital es el modelo económico imperante, y las omisiones de gobiernos dizque promotores de “changarros”, pero fieles en la práctica a la tesis mercadócrata de que la mejor política industrial -o agrícola- es no tener política industrial.

La diáspora que nos aqueja no se inscribe en una presunta mundialización racional de los mercados de trabajo, sino en la globalización excluyente. No compensa la desigualdad interregional en la oferta y la demanda laborales, sino que desequilibra económica y socialmente a los países expulsores. No es una migración que vaya a contenerse liberalizando el comercio, que pueda neutralizarse con métodos represivos, susceptible de ser atajada neocolonizando el sur, o que pueda atenuarse capitalizando las remesas.

Sin duda es urgente amortiguar el dolor social que causa la diáspora, apoyando a los migrantes organizados que reivindican su dignidad y defienden sus derechos, y buscando acuerdos binacionales que mejoren la situación de los indocumentados. Pero es necesario también, defender el derecho de no migrar. El derecho de los hombres del sur a permanecer en su tierra si así lo desean.

No se trata de atajar la migración, ni mucho menos de penalizarla moralmente, todos tenemos el derecho de mandarnos mudar si se nos da la gana. Pero este derecho irrenunciable sólo será tal si tenemos también el derecho simétrico de quedarnos, sin que esa decisión signifique renunciar a una vida digna y cancelar las expectativas de progreso. Mientras en México la esperanza sea un pasivo y se mantenga el déficit de futuro que desde hace décadas nos aqueja, emigrar no será una opción libre y un derecho, será una forzada compulsión.

“Sería desastroso para nuestra economía nacional el reconocimiento como sistema aceptado, del precedente de facilitar la salida de nuestros mejores elementos de trabajo cuando encuentran demanda en el extranjero, y a la inversa, recibir forzosamente tales contingentes de trabajo cuando ya no son necesarios en el extranjero y nosotros tampoco estamos económicamente en condiciones de recibirlos”. Estas sensatas palabras las dijo el Secretario de Relaciones exteriores. Naturalmente no fue el actual, sino don Manuel Téllez, quién ocupaba el cargo durante la presidencia del general Calles. Y es que apelar a la soberanía laboral para evitar crisis de empleo es una idea anacrónica, perdonable en los nacionalistas años treinta pero inadmisibles en los tiempos de la globalidad.

Y sin embargo hoy más que nunca es necesario reivindicar el derecho de los mexicanos al trabajo, exigiendo programas de fomento y defensa del empleo que garanticen la seguridad laboral del país. Pero esto no es posible sin ejercer la soberanía. No sucederá si el Estado mexicano no asume su derecho soberano —y su obligación Constitucional— de imprimirle a la economía el curso que demanda el bienestar de los ciudadanos; si los funcionarios públicos no entienden que su tarea es hacer económicamente posible lo que es socialmente necesario, y no a la inversa.

Necesitamos políticas industriales y agrícolas orientadas a la defensa y ampliación de la planta productiva y de los cultivos de interés nacional. Debemos restablecer la seguridad alimentaria, respaldando a la pequeña y mediana producción campesina, y fortaleciendo el mercado interno, tanto nacional como regional y local. Nos hace falta restaurar la seguridad laboral, defendiendo y ampliando la planta fabril y la actividad agropecuaria y mediante la integración de cadenas que potencien nuestras complementariedades productivas.

Entonces, y sólo entonces, las remesas que sigan llegando podrán incorporarse productivamente al desarrollo. Entonces, y sólo entonces, la migración dejará de ser condena para devenir intercambio enriquecedor.

Tiempo de Utopía

Y sin embargo, en una perspectiva más amplia, hay que reconocer que aun si las hubiera, las políticas públicas orientadas a restaurar nuestra soberanía laboral no serían más que paliativos, acciones compensatorias de una tendencia estructural que tiene que ver con la naturaleza profunda del sistema capitalista y con la fase del mismo que nos tocó vivir.

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley”, dice en su artículo 123 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derecho modesto de apariencia mínima e irrenunciable, pero cuyo cumplimiento demanda nada menos que una revolución. Y no me refiero a una revolución política sino a una subversión profunda del sistema económico y social.

Porque los éxodos planetarios son el síntoma más generalizado y lacerante del agotamiento del absolutismo mercantil. Si las jornadas interminables, el

esfuerzo agotador, las fábricas insalubres, los salarios de hambre y el trabajo infantil dramatizaron el despegue del capitalismo industrial; la estampida poblacional, la criminalización de los indocumentados, el cruento tráfico de personas, el racismo y la minusvalía social de los migrantes dramatizan el dualismo laboral del capitalismo contemporáneo. Un orden injusto y expoliador cuyo mayor crimen ya no es la explotación asalariada de los integrados sino la exclusión de los redundantes.



En los países metropolitanos y en general en las empresas de punta, la revolución informática, la robotización y la flexibilización laboral convergen en un modelo de organización empresarial llamado “reingeniería”, que permite incrementar la producción reduciendo dramáticamente el trabajo vivo en ella empleado.

Debido a esta revolución tecnológica, la economía capitalista crece sin generar nuevos puestos de trabajo estables, destruyendo muchos de los existentes y “externalizando” los requerimientos laborales menos calificados o más intermitentes, de modo los nuevos empleos, cuando los hay, son trabajos contingentes, mal pagados, precarios, transitorios a tiempo parcial.

“La sociedad —escribe André Gorz en *Salir de la sociedad salarial*- queda dividida en dos partes: por un lado las personas cuya actividad les reporta una remuneración suficiente y, por otro, una infraclase que, de una u otra manera vende sus servicios —a título individual o como asalariado de establecimientos de comidas, de limpieza, vigilancia, reparto a domicilio, etc.— ... a cambio de una remuneración mínima”

¿Y quienes conforman esta “infraclase” que lava platos, tiende camas, arregla jardines, se ocupa de la limpieza, reparte pizzas? ¿Quiénes son los que se pelean por los *bad jobs*, los trabajos basura, los empleos precarios y subretribuidos de los países metropolitanos? Son, sin duda, los migrantes de a pie y en particular los migrantes indocumentados.

La migración de la periferia al centro es un fenómeno planetario con múltiples facetas: globalización plebeya, neocolonización centrípeta, implosión demográfica. Pero, también hay que preguntarse qué van a hacer a las metrópolis las legiones de nuevos peregrinos. Porque ahora ya no van a incorporarse a la industria pesada en expansión, como muchos migrantes mexicanos que hace décadas se avecindaron en Chicago. El éxodo mexicano de ahora se enfila, en parte, a los *agricultural jobs*, pero cada vez más a los servicios: asistencia doméstica, limpieza, jardinería, preparación de comidas, etc.

Los que son expulsados de sus países por la insuficiencia de empleos dignos y el déficit de futuro que aqueja a la periferia, no se incorporan como antes al núcleo central de los procesos de acumulación metropolitanos sino a las actividades marginales que no interesan al gran dinero. Pasan así, de la periferia a la periferia; de la marginalidad subdesarrollada a la marginalidad primermundista.

Y es que la mano de obra migrante ya no es directamente necesaria para la acumulación del gran capital, que depende cada vez más de la privatización de las ideas y menos del valor trabajo, de modo que los nuevos nómadas encuentran su ubicación en la periferia productiva: unidades económicas subempresariales tanto agrícolas como artesanales y de servicios, que son periféricas a las tendencias dominantes del capital.

En una perspectiva quizá excesivamente metropolitana pero sin duda sugerente, André Gorz parte de estas realidades para esbozar una utopía. “Cuando el volumen del trabajo que el capital es capaz de emplear con beneficio no deja de disminuir, la actividad humana sólo puede desarrollarse al margen de la esfera de la economía capitalista”, nos dice. “El objetivo — continua— es que cada persona pueda desarrollarse plenamente desplegando sus actividades en tres niveles: en el nivel macrosocial del trabajo profesional en virtud del cual crea valores de cambio y participa en la producción y en la evolución de la base propiamente económica de la sociedad; en el plano microsociales de la producción cooperativa y comunitaria, creadora de valores de

uso y de relaciones sociales vivas, y donde los habitantes asociados pueden volver a recuperar el dominio de su marco de vida y de la calidad de su ambiente; en el plano de la vida privada, finalmente, que es el lugar de la producción de si mismo, de las relaciones entre personas valorizándose mutuamente como sujetos únicos, y de creación artística. Superaremos la sociedad salarial —y con ella el capitalismo— cuando las relaciones sociales de cooperación voluntaria y de intercambios no mercantiles autoorganizados predominen sobre las relaciones de producción capitalistas: sobre el trabajo-empleo, el trabajo mercancía. Esta superación... sólo conducirá a una sociedad poseconómica, poscapitalista, si esta sociedad es proyectada, exigida, por una revolución tan cultural como política...” (ibid)

Ahora bien, si en vez de hacer una lectura primermundista del texto de Gorz hacemos una lectura desde la periferia, las relaciones comunitarias y de cooperación voluntaria donde el sentido de la producción es el de los valores de uso, y donde es posible desarrollar socialidades vivas y conservar la calidad del medio ambiente, no nos remite a una comuna en los alrededores de Paris o de Bruselas, sino a los colectivos campesinos de países orilleros como el nuestro: entidades más sociales que económicas, que desarrollan una actividad diversificada, discontinua y en gran medida desprofesionalizada, donde se combinan el autoabasto con la producción para el intercambio; asociaciones de trabajadores donde la forma salario, aunque existente, no es cualitativamente dominante en las prestaciones laborales; unidades de producción, consumo y convivencia presididas por la lógica del bienestar, donde el valor de uso coexiste con el precio pero sigue siendo el regulador de la producción y del intercambio. Es decir que lo que vislumbra Gorz como una sociedad poseconómica y poscapitalista metropolitana, es entre nosotros —los orilleros— una realidad preeconómica y precapitalista.

Precapitalista y no; porque en realidad estos microcosmos socioeconómicos campesinos, donde el desdoblamiento del valor de uso en valor de cambio aun no se impone como inversión, y por tanto como predominio del mercado y del lucro, no son precapitalistas sino meta capitalistas o trans capitalistas. No remanente o herencia de otros modos de producir, sino sistemas de relaciones

contemporáneos por derecho propio, que se recrean una y otra vez en actividades resistentes al modelo industrial del capital, como las agropecuarias. Sectores perversos de la producción, que al sustentarse en la diversidad y los ciclos de la naturaleza, resisten al emparejamiento tecnológico y la serialidad laboral propios de la homogenización industrial. Ámbitos atípicos donde los campesinos, las comunidades indígenas y otras quimeras preservan y reconstituyen la diversidad productiva, consuntiva y cultural, como única estrategia viable de sustentabilidad y hasta de simple sobrevivencia.

Porque la diversificación y el policultivo, como estrategias respetuosas de la sistémica diversidad de la naturaleza, dan lugar a una producción con requerimientos laborales variados y discontinuos que reivindica como virtuosa la multifuncionalidad del polifacético trabajador agrosilvopastoril; un chambeador desprofesionalizado cuyo desempeño intermitente y sincopado se asemeja mucho a la plurihabilidad que demanda de las mujeres (y de algunos hombres) el llamado trabajo doméstico; “labores del hogar” que junto con las agropecuarias y las artesanales son el otro gran reducto del bricolaje y el pensamiento salvaje. Porque en la huerta, en la parcela, en el potrero, en el taller, en el cuarto de costura y en la cocina la razón científica no supe a la intuición ni desplaza a los saberes heredados. Así pues, la especialización profesional no lo es todo en la vida, también son creativos —y mucho más placenteros— el amateurismo, la improvisación, el guiso de sobras, el palomazo.

De esta manera, el límite que en el tránsito de los milenios le imponen al capital la revolución informática y la robótica, es el mismo que la naturaleza le impuso al capital desde siempre, y que por centurias se expresó en innumerables perversiones rurales: rentas territoriales, reparto diferencial de las utilidades, estatismo agropecuario, recreación por el capital de la pequeña y mediana producción campesina y, más recientemente, reconocimiento y valoración de la plurifuncionalidad de lo rural y normalización de los modos diversos, adecuados, blandos, ecológicos, limpios y orgánicos de producir.

De la misma manera que la “economía moral”, que el historiador inglés E. P. Thompson descubre en la edad media, pervive hasta nuestros días en la comunidad agraria, y aun en la economía doméstica urbana, proyectándose al futuro en las experiencias autogestionarias campesinas; así la sociedad “post económica” que vislumbra Gorz para los países centrales es realidad y proyecto en los periféricos.

La condición de posibilidad del ejercicio del derecho de los orilleros a no migrar —que en el fondo es el derecho a la esperanza en sus ámbitos de origen— no radica, entonces, en el inviable crecimiento de la economía periférica conforme al viejo modelo de la industria y los servicios metropolitanos —crecimiento que, además, ya mostró su límite ocupacional—. La clave del derecho a quedarse está en la revalorización de la comunidad agraria y la economía campesina, y en general en el reconocimiento y ponderación de las actividades domésticas, comunitarias y asociativas en pequeña y mediana escala, no como lastres tecnológicos y económicos del pasado sino como prefiguración de un futuro posindustrial, poscapitalista, poseconómico..

Por muchos años los mexicanos y otros orilleros vivimos una ilusión: la de que algún día nuestros países transitarían a la “modernidad” siguiendo los pasos de las naciones desarrolladas. Espejismo que todavía hace dos décadas trataron de vendernos los neoliberales, cuando nos dijeron que los “daños colaterales” asociados a la apertura comercial y el “ajuste estructural” serían recompensados por el crecimiento de la economía, y en particular, que los desocupados resultantes del indispensable “redimensionamiento” de la agricultura, encontrarían acomodo en la impetuosa expansión de la industria y los servicios (desde los ochenta se hablaba del cabalístico 7%).

La hipótesis de que, a la larga, la expansión del capital es económicamente incluyente, de modo que la marginalidad es, hora si que marginal; como la hipótesis análoga según la cual la irresistible proclividad del capital a subsumir lo lleva tendencialmente a apropiarse de todo el trabajo, de modo que la marginalidad no es más que “ejército de reserva”, son dos planteos simétricos, uno apologético y el otro crítico, pero ambos igualmente insostenibles. Sin duda

el capital es un globalifágico devorador compulsivo, pero también excreta lo que ya no necesita. Y hoy el reto del gran dinero no está en como “proletarizar” a los campesinos y otros trabajadores por cuenta propia, sino en como deshacerse a bajo costo de los millones y millones de personas redundantes, hombres y mujeres que no le son útiles ni como trabajadores ni como consumidores.

Al ser cuestionado por los revolucionarios rusos que se identificaban como populistas, sobre el lugar que le asignaba a la comunidad agraria en la construcción de su utopía poscapitalista, Carlos Marx escribió en una famosa carta de 1881 a Vera Zasulich que “la comuna rural... es el punto de apoyo de la regeneración social de Rusia”. Y así como el visionario alemán admitía hace más de cien años la posibilidad de que el comunitarismo precapitalista entroncara con el comunismo, así hoy me parece a mi que los altermundismos metropolitanos, del corte del de Gorz, tendrán que reconocer que en el mundo rural de la periferia, y en general en las estrategias de sobrevivencia y de resistencia de los marginados, hay algo más que nostalgia reaccionaria; hay recuerdos del porvenir.

Si los orilleros no tenemos lugar en la economía del capital, habremos de crear una sociedad poseconómica.

¡Excluidos del mundo unios!